

Impacto del COVID-19 en América Latina, una región sin estrategia regional

Lila Roldán Vázquez

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina

Ex -Subsecretaria de Asuntos de América Latina y el Caribe

Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (C.A.R.I.)

lilaroldanvazquez@gmail.com

Resumen:

El propósito de este artículo es el de ponderar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la región de América Latina y el Caribe, afectada por problemas estructurales, como la pobreza y la débil institucionalidad, y atravesada también por una creciente polarización ideológica en los gobiernos de la región constatando, al mismo tiempo, la falta de una estrategia regional para abordar la crisis.

Palabras clave: COVID-19 - Estrategia regional - Socioeconomía - Institucionalidad - Regionalismo

Abstract:

The purpose of this article is to evaluate the impact of the COVID-19 epidemic on the Latin American and Caribbean region, which is currently facing not only structural problems, such as poverty and weak institutions, but also an increasing ideological polarization among governments in the region. At the same time, we certify the absence of a regional strategy to face this crisis.

Key words: COVID-19 - Regional strategy - Socio-economy - Institutions - Regionalism

La irrupción del COVID 19 en cifras

La pandemia provocada por el virus Sars-Cov2 reveló o profundizó tendencias sociales, económicas y políticas ya subyacentes en la mayoría de los países. Es lo que sucede generalmente con las crisis, que sirven como detonantes de problemas o conflictos que las preceden. En América Latina y el Caribe, declarada en 2020 el epicentro de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el COVID-19 puso en evidencia no sólo las insuficiencias de sus sistemas sanitarios y el retraso en el crecimiento económico a nivel general, sino también las flaquezas de sus sistemas institucionales y de las relaciones entre sus miembros.

América Latina y el Caribe no enfrentó las consecuencias de la pandemia en su mejor momento. Las condiciones socioeconómicas de los países de la región, así como la polarización entre concepciones ideológicas divergentes de sus respectivos gobiernos y la fragilidad institucional que la caracteriza, distan de conformar el escenario más apropiado para una respuesta eficaz y coordinada a los desafíos de esta nueva amenaza mundial.

El impacto del gran número de casos registrados en la región: 44.770.529 contagios y 1.483.554 decesos al 27 de septiembre pasado, se vio potenciado por la falta de vacunas durante la mayor parte del año 2020 y por el agravante de una insuficiente infraestructura sanitaria en la mayoría de los países. En esas cifras, los mayores números corresponden hoy a seis países: Brasil (21.445.651 casos y 597.255 decesos), Argentina (5.258.466 casos y 115.225 decesos), Colombia (4.959.144 casos y 126.336 decesos), México (3.671.611 casos y 277.978 decesos), Perú (2.177.283 casos y 199.423 decesos) y Chile (1.655.071 casos y 37.476 decesos). (Fuentes: Johns Hopkins University y Statista)

Aún ante tal situación de crisis humanitaria y socioeconómica, los países latinoamericanos y caribeños no pudieron diseñar una estrategia regional para enfrentarla. Factores estructurales o de coyuntura, impidieron una adecuada respuesta a la crisis, no sólo a nivel de cada uno de los países sino también -y de manera aún más evidente- una respuesta regional coordinada y eficiente para disminuir los contagios y reducir los graves efectos sobre las economías nacionales y a nivel regional. Fueron escasos tanto los instrumentos disponibles, como las acciones adoptadas en conjunto para contrarrestar o aliviar los efectos de la pandemia. Basta con observar los indicadores que se manifiestan a continuación.

Factores estructurales: en primer lugar, fue determinante **la situación socioeconómica** de la región, con elevados índices de pobreza y desempleo, condiciones crónicas de desigualdad económica y creciente descontento social. El impacto de la pandemia sobre la economía en los países en general y en las naciones latinoamericanas, en particular, fue muy importante. Sólo para dar un ejemplo, la tasa de desocupación en Brasil ascendió en abril de 2020 a 12,6%, llegando así a la elevada cifra de 12,8 millones de desempleados: alrededor de 900.000 personas habían quedado sin trabajo desde el inicio de la pandemia en ese momento, según el Instituto de Geografía y Estadística del Brasil (IBGE). Esa situación se ocurrió de modo similar en todos los países del subcontinente, con las consecuencias previsibles para la recuperación de sus economías y

de la calidad de vida postpandemia de sus poblaciones. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas advirtió oportunamente -ya en mayo de 2020- sobre el aumento de la inseguridad alimentaria en la región, estimando que debido a la pandemia del COVID-19 al menos 14 millones de personas podrían pasar hambre en América Latina.

Por otro lado, en un rasgo compartido con numerosos países de distintas regiones del mundo -inclusive los de mayor desarrollo- las *infraestructuras sanitarias* no están en general preparadas para atender suficiente y adecuadamente las necesidades originadas por la pandemia. Su acondicionamiento, y el equipamiento para detección y tratamiento del virus, requieren una impostergable inyección de recursos en el sistema sanitario, que alterará naturalmente las prioridades habituales de los presupuestos nacionales, incidiendo gravemente sobre el crecimiento de la región.

Adicionalmente, la *fragilidad institucional* que afecta a muchos países latinoamericanos y caribeños deriva en ordenamientos irregulares de gobierno que dificultan la interacción regional e internacional y, por ende, la posibilidad de construir una estrategia regional adecuada.

Asimismo, ante esas carencias democráticas se corren serios riesgos de un incremento del autoritarismo o de mecanismos populistas. En ese marco, la aparición de la pandemia del COVID-19 ha contribuido a profundizar las divergencias internas, a postergar definiciones políticas o a acelerar procesos políticos y sociales en varios países de la región.

Factores coyunturales: durante la pandemia, la preocupación casi excluyente de los respectivos gobiernos por sostener su vigencia y sus economías nacionales, privilegiándola frente a la concepción de cooperación regional y en muchos casos, la falta de políticas de Estado que permitan mantener y afianzar los proyectos de integración, conspiraron en contra de los esfuerzos de concertación regional. Como consecuencia, los organismos y mecanismos regionales sufrieron un evidente y progresivo debilitamiento.

Asimismo, varios países de la región debieron enfrentar situaciones especiales en su política interna, derivados en algunos casos de una muy reciente asunción -Argentina-; de procesos electorales ya previstos -Bolivia, Chile, Venezuela-; o de movimientos sociales de protesta -Chile, Ecuador-, que les obligaron a modificar sus planes de gobierno o a una dispersión de esfuerzos ante los requerimientos ineludibles de la crisis sanitaria.

Surgieron asimismo diferencias entre países vecinos, por el diverso tratamiento sanitario y de control de fronteras para impedir la propagación del virus o debido a críticas públicas a las políticas respectivamente aplicadas. Este no fue, ciertamente, un fenómeno exclusivo de América Latina: la reacción generalizada tanto en países prósperos como en los países en vías de desarrollo fue la retracción sobre sí mismos, con cierre de fronteras incluso en espacios comunitarios de libre circulación. La cooperación entre Estados, muy limitada

en los primeros tiempos de la pandemia -incluso en el ámbito de organismos internacionales- se fue organizando lentamente, distando todavía hoy de alcanzar a todas las regiones de acuerdo a sus necesidades.

En América Latina y el Caribe, a las exigencias para adaptar y mejorar las respectivas infraestructuras sanitarias, se agregó la preocupación por la obtención de vacunas contra el COVID-19, que no fueron suficientes ni obtenibles en los tiempos deseados en la mayoría de los países de la región.

Impacto económico de la pandemia

La crisis sanitaria y socioeconómica provocada por la pandemia del COVID-19 tuvo un alcance universal: fue tal vez la primera que afectó a todos los países, en todas las regiones del mundo sin excepción, siendo América Latina y el Caribe una de las regiones en las cuales impactó con mayor fuerza.

En su informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial de abril de 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideraba muy probable que, en virtud del “Gran Confinamiento”, la economía mundial sufriría ese año la recesión más aguda desde la Gran Depresión, con una drástica contracción del crecimiento. Con relación a América Latina y el Caribe, el informe preveía un crecimiento negativo del 7% para la región; la contracción real fue finalmente de -6,8%.¹

En abril de 2021, el FMI señalaba que “Transcurrido un año de la pandemia, las perspectivas mundiales siguen siendo muy inciertas...las recuperaciones económicas están divergiendo entre países y sectores, debido a la diversidad de trastornos inducidos por la pandemia y del grado de respaldo de las políticas.” Con la advertencia que dichas perspectivas están sujetas a una gran incertidumbre relacionada con el curso de la pandemia, el tiempo que transcurra hasta que las vacunas faciliten la normalización, y la evolución de las condiciones financieras, el Fondo estima que “según las proyecciones, el crecimiento mundial será de 6% en 2021 y de 4,4% en 2022.”²

En ese marco, las proyecciones de crecimiento de los países de la región latinoamericana y el Caribe para 2021 y 2022 se han revisado al alza también, aunque en proporciones más modestas: 5,8% para 2021 y 3,2% para el año 2022.

En su último informe de julio de 2021, el Fondo señala que el pronóstico mundial no ha variado con respecto al informe de abril, pero las revisiones se ven neutralizadas, en tanto que las perspectivas de las economías de mercados emergentes y en desarrollo para 2021 se han revisado a la baja. El Organismo destaca el acceso a las vacunas como la principal brecha, que divide la recuperación mundial en dos bloques: la mayoría de las

¹ Fondo Monetario Internacional - Informe de perspectivas de la economía mundial. Abril 2020

² Fondo Monetario Internacional - Informe de perspectivas de la economía mundial. Abril 2021

economías avanzadas, que pueden esperar una mayor normalización de la actividad a finales de 2021 y aquellos países que todavía se enfrentan a un rebrote de contagios y un aumento del número de víctimas de COVID³

Si bien las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos sanitarios de la pandemia han afectado fuertemente a todas las economías de la región, en algunos casos los cierres de frontera y la suspensión del turismo han provocado una enorme contracción económica. En el Caribe, causaron una caída abrupta del tráfico aéreo y el turismo, con graves consecuencias para una región en la que el turismo supone el 50 % de la economía en algunos países - así, Cuba y República Dominicana se vieron especialmente afectadas.

Las condiciones socioeconómicas estructurales de la región -la que prácticamente no había registrado crecimiento durante el período previo a la pandemia- junto a la fuerte contracción económica de 2020, se tradujeron en consecuencias indeseables para su desarrollo:

- (i) significativos incrementos de la pobreza y la desigualdad económica y social;
- (ii) un gran aumento del desempleo;
- (iii) cierre de micro, pequeñas y medianas empresas en gran número y
- (iv) progresiva caída de la inversión.

- (i) La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó oportunamente que, en el marco de desaceleración económica, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema que se había registrado en el año 2019: del 30.1% al 30.8% y del 10.7% al 11.5%, respectivamente, la pandemia provocaría la peor recesión en la historia de la región. En abril de 2020, la Comisión publicó un Informe Especial sobre los posibles efectos del COVID-19, en el cual advertía: “América Latina y el Caribe enfrenta la pandemia desde una posición más débil que la del resto del mundo... los efectos de la crisis han llevado a pronosticar una caída del PIB de al menos un 1,8%, aunque no es de descartar que el desarrollo de la pandemia lleve a previsiones de contracciones de entre un 3% y un 4%, o incluso más.”⁴

Confirmando ese pronóstico, en su Panorama Social de América Latina 2021, la CEPAL informó que, aunque las medidas de protección social adoptadas por los Estados de la región evitaron un mayor aumento de la pobreza y la pobreza extrema, hubo un retroceso de 12 años en pobreza y de 20 años en pobreza extrema.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la Comisión, se registraron mayores niveles de pobreza en zonas rurales, en la infancia y entre indígenas y afrodescendientes. Asimismo, la reducción que se venía registrando en el Índice GINI, que marca la desigualdad existente en los países, se habría estancado ya desde el año 2017.

³ Fondo Monetario Internacional - Informe de perspectivas de la economía mundial, Julio 2021

⁴ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Informe Especial sobre los posibles efectos del COVID-19 (Abril 2020)

Con el objetivo de compensar las pérdidas de ingresos por los efectos de la pandemia, los países de la región implementaron 263 medidas de protección social de emergencia, de las cuales el 56% fueron transferencias monetarias, que no fueron sin embargo suficientes para cubrir las necesidades básicas.⁵

- (ii) La CEPAL informó que “la crisis del COVID-19 provocó un incremento de la tasa de desocupación regional, que alcanzó en 2020 el 10,5%, la más elevada que se ha registrado en la región desde 1990 y entre los sectores más afectados ... destaca el empleo informal, el cual, de acuerdo con la OIT (2018), representa cerca de un 50% del total de los ocupados en América Latina y el Caribe.”⁶

Aunque para 2021 se espera una recuperación del 6,7% del número de ocupados con respecto al cierre de 2020, dicha mejora no será suficiente para alcanzar el nivel de ocupación previo a la pandemia. Los grupos de población más afectados serían las mujeres, los jóvenes y las personas con menor nivel educativo, ya que se esperan cambios en la demanda de trabajo, con mayores exigencias de habilidades relacionadas con la tecnología.

- (iii) Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en América Latina y el Caribe, en particular aquellas de menor tamaño, han sido las que más han sufrido el impacto de la crisis causada por la pandemia del COVID-19: han experimentado mayores caídas sostenidas de las ventas y han afrontado mayores tasas de cierres permanentes que las grandes empresas.

Se estima que las PYMES representan hasta el 99,5% de todas las empresas de la región, el 60% de la población empleada y el 25% del PIB; son una fuente primaria de empleo y un proveedor clave de bienes y servicios para una gran parte de la población.

En un estudio centrado en cuatro países centroamericanos-El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua-, el PNUD constata como entre el estallido de la crisis hasta agosto de 2020, las pequeñas empresas de El Salvador y Honduras sufrieron caídas de las ventas de hasta el 60 %, que comenzaron a recuperarse entre esa fecha y enero de 2021. En ese período, el cierre de pequeñas empresas alcanzó al 5,5% en Honduras, al 3,5% en Nicaragua y según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, entre mayo de 2019 y septiembre de 2020, cerraron definitivamente en ese país aproximadamente un millón de empresas micro, pequeñas y medianas, es decir un 20,8 % del total.

- (iv) La pandemia COVID-19 tuvo una gran incidencia negativa en la inversión extranjera directa (IED) en el mundo en general, retrocediendo a los niveles del año 2005. El efecto se sintió más profundamente en los países desarrollados, llegando a -73% en la Unión Europea. En las economías en desarrollo la reducción de los flujos de inversión fue significativamente menor, aunque con un impacto tal vez mayor en virtud de las

⁵ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Panorama Social de América Latina 2021

⁶ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Estudio Económico de América Latina y el Caribe, Dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID-19 (Agosto 2021)

debilidades estructurales de sus economías. En la región de América Latina y el Caribe descendió a -41%. (CEPAL, 2020).

Impacto político a niveles nacional, regional e internacional

Como se señaló más arriba, la fragilidad institucional y el deterioro democrático en América Latina y el Caribe configuran, desafortunadamente, un marco propicio a la aparición de síntomas de populismo y de autocracia en los gobiernos de la región. En situaciones de crisis generalizadas, sean ellas humanitarias, sanitarias o políticas, ese riesgo se incrementa.

La conmoción interna puede tener efectos decisivos en el devenir político de los países. Ello se comprueba en el caso de la pandemia del COVID-19: se multiplicaron en la región las protestas populares frente a las medidas adoptadas por las autoridades y a las consecuencias sociales y económicas de las restricciones impuestas: la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, fueron escenario de tales manifestaciones. En otros casos se pusieron en duda las aseveraciones de los gobiernos respecto a la pandemia, como en Brasil, México o Nicaragua.

La región fue testigo de crisis internas en varios países: uno de los casos más llamativos es el del Brasil, donde se produjo un escenario de enfrentamiento entre los poderes del Estado y un cisma entre el Gobierno central y varios de los Gobiernos estatales, así como la polarización de la población, dividida entre el apoyo y la oposición a las políticas sanitaria y económica de la Presidencia. En una situación sin precedentes, se registraron más de treinta pedidos de “*impeachment*” al presidente Jair Bolsonaro, quien ha conseguido repercusión internacional por su peculiar actitud frente a la pandemia y a sus opositores, desafiando al Parlamento y al Tribunal Supremo Federal (Corte Suprema de Justicia), y formulando críticas descarnadas a Gobernadores y a los otros poderes del Estado. Este accionar llevó que sus índices de aprobación se desplomaron hasta superar el 50% de imagen negativa -se estima que si las elecciones presidenciales se celebraran hoy el expresidente Luiz Inacio “Lula” da Silva lo aventajaría por casi 20 puntos porcentuales, por ello cabe destacar que Bolsonaro ha amenazado con suspender los comicios previstos para el próximo año si no se modifica el sistema de votación electrónica. La crisis política desatada en 2020 continúa hasta hoy: el 2 de octubre pasado, en un movimiento infrecuente, cientos de miles de personas salieron a la calle a pedir la dimisión del presidente Bolsonaro por su manejo de la pandemia y por la situación humanitaria y económica sin precedentes en el país.

Otro país de la región en el que la pandemia ha tenido efectos trascendentes desde el punto de vista político es Bolivia, donde la crisis política y social desatada en 2019 luego de la anulación del proceso electoral que proclamara ganador al expresidente Evo Morales y la asunción del gobierno interino de Jeannine Añez, debía resolverse en elecciones generales previstas para el 3 de mayo de 2020. Dichos comicios debieron suspenderse en virtud de la pandemia, prorrogándose su realización en dos ocasiones, hasta su celebración en octubre de ese año. Ello contribuyó a ahondar la polarización y el malestar social en la población boliviana.

En Chile, el país se encontró sacudido por protestas populares desde fines de 2019, agudizadas en los primeros meses de 2020, por ello, se decidió también, en virtud de la pandemia, postergar al 25 de octubre de 2020 el referéndum constitucional previsto originalmente para el 26 de abril de ese año. Aunque dicho referéndum sirvió como válvula de escape temporal al intenso descontento social por las condiciones económicas de las clases menos favorecidas y las falencias en los sistemas sanitario, educativo y previsional, el índice de aprobación del Presidente Piñera cayó al 10%. La gran mayoría de la población considera que el país enfrenta la peor crisis política desde el retorno a la democracia y no hay certezas sobre el eventual cambio estructural del sistema político y económico que podría alcanzarse con una nueva Constitución, aún en proceso de elaboración. Al mismo tiempo, se preparan activamente las elecciones presidenciales que deben tener lugar en octubre del presente año.

A su vez, en Venezuela, un país convulsionado social y políticamente, con su economía y su sistema de salud en estado de gran precariedad, el Presidente Maduro debió postergar las elecciones parlamentarias para la renovación de la Asamblea Nacional a causa de la emergencia sanitaria del COVID-19. Los comicios, que permitieron al Gobierno recuperar el control del órgano legislativo, que se celebraron finalmente el 6 de diciembre de 2020, habiéndose caracterizado por el boicot de los principales partidos y líderes de la oposición y por una masiva abstención de la ciudadanía.

Nicaragua se diferenció de la mayoría de los países de la región, ya que el Presidente Daniel Ortega decidió mantener abiertas las fronteras así como las escuelas, y promover y alentar los eventos deportivos y las reuniones públicas – incluyendo una caminata masiva llamada “Amor en tiempos de COVID-19”. Al mismo tiempo, se acentuó el autoritarismo de Ortega, quien reprimió las manifestaciones populares y encarceló a numerosos estudiantes, activistas sociales y opositores políticos.

Finalmente, en la Argentina -donde se decretó la cuarentena más prolongada- las medidas adoptadas por el Gobierno para contrarrestar la pandemia fueron en general bien aceptadas por la población en los primeros meses, pero la insatisfacción social fue creciendo ante las sucesivas prórrogas de las restricciones y sus efectos en la libertad de circulación, la educación y la economía. Ello derivó en manifestaciones ciudadanas en reclamo de una mayor apertura de la vida económica y de los establecimientos educativos, que permanecieron cerrados durante un año y medio e incidió, sin dudas, en el resultado adverso al oficialismo que se registró en las elecciones primarias parlamentarias a mediados de septiembre de 2021.

A las situaciones de crisis internas en varios países, se agregaron los desentendimientos bilaterales o regionales, originados en las diferencias de orientación política de los respectivos gobiernos. La ideología se impuso una vez más en América Latina, como un escollo a la concertación de posiciones y a la cooperación entre los miembros de la región.

Los mecanismos regionales de concertación política y cooperación en América Latina y el Caribe no escaparon a esta regla general. Hubo no obstante algunas acciones acordadas en conjunto por los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), el Foro para el progreso de América del Sur (PROSUR) o el Mercado Común del SUR (MERCOSUR)

En efecto, los países miembros de la CAN -Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú- acordaron concertar esfuerzos para el combate al Coronavirus, evaluar la posibilidad de efectuar compras conjuntas de insumos médicos e implementar medidas para facilitar el comercio exterior, aunque los efectos de esa decisión de cooperación fueron limitados.

El Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), una de las iniciativas regionales más recientemente creadas, e integrada por ocho países suramericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú), anunció en marzo de 2020 que sus miembros acordaron facilitar las repatriaciones y realizar una búsqueda conjunta de financiamiento. Sin embargo, la decisión no tuvo seguimiento debido a las diferencias ideológicas entre los Gobiernos que lo componen actualmente.

El MERCOSUR, tal vez el bloque regional más consolidado e integrado por Estados partes -Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (actualmente suspendido)- y Estados asociados -Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam- acordó ya en marzo de 2020 la libre circulación de cargas, mercaderías e insumos, así como la adopción de medidas económicas y accesos a préstamos con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Entre las medidas adoptadas, el mecanismo de integración y concertación política aprobó un fondo de emergencia de 16 millones de dólares, destinado a la Investigación, Educación y Biotecnología aplicadas a la Salud, para combatir el Coronavirus en sus países miembros. Asimismo, el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) transfirió quinientos veinte mil dólares al Paraguay, destinados al Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública de ese país. Dichas medidas puntuales no formaron parte, lamentablemente, de un plan de acción regional y no se registraron mayores avances en la cooperación intrarregional, a causa de importantes desentendimientos entre los Estados Parte del mecanismo.

En el contexto internacional, el fenómeno tal vez más visible fue la retracción en los programas de ayuda sanitaria o económica de los Estados Unidos -concentrado en la recuperación de la gravísima situación sanitaria dentro de sus propias fronteras y en las prioridades electorales que naturalmente motivaron muchas de las decisiones de su Gobierno. Esa retracción, percibida a nivel mundial, se sintió de manera pronunciada en la región latinoamericana, no sólo por la limitación inicial a la ayuda sanitaria sino también por el impacto económico debido a la disminución de las remesas de trabajadores latinoamericanos y caribeños a sus respectivos países de origen, o las dificultades a la actividad económica habitual en virtud del cierre de fronteras para evitar el ingreso de refugiados y a la prohibición de ingreso de personas provenientes de países

latinoamericanos señalados puntualmente, como el caso de Brasil, particularmente afectado por los efectos sanitarios de la pandemia.

Ante esa retracción estadounidense de su tradicional zona de influencia y en el marco de su competencia a nivel global, China hizo gala del despliegue en América Latina y el Caribe de su llamada “diplomacia de las mascarillas”. La República Popular, segundo socio comercial de la región, ha superado a los Estados Unidos en varios de sus países. Diecinueve estados latinoamericanos han adherido a la Iniciativa de la Franja y de la Ruta, favoreciendo crecientes inversiones chinas en proyectos de infraestructura y energía.

Desde los primeros meses de 2020 y en tanto se recuperaba del impacto de la pandemia en su propio país, China inició una ofensiva sanitaria y económica para reposicionarse en la escena mundial, brindando asistencia técnica y material sanitario, así como un poco más tarde, la venta de vacunas contra el COVID-19. En nuestra región, ejemplos de esas medidas fueron el establecimiento de puentes aéreos con México, Venezuela y la Argentina -entre otros- para la provisión de mascarillas, kits de prueba y respiradores artificiales o la venta a Haití de dieciocho millones de dólares en equipo médico.

La Unión Europea (UE), también un socio mayoritario de América Latina y el Caribe, renovó su presencia en la región después de los primeros meses de un casi total aislamiento: así, le destinó parte de los fondos que ofrece a países terceros para combatir la pandemia y una importante provisión de vacunas. Hasta abril de 2021, la UE había hecho un desembolso de 1.500 millones de euros sobre el total de 3.000 millones de euros comprometidos para la región, orientados a mejorar la respuesta sanitaria y de prevención y a la asistencia técnica.

Asimismo, en el marco del Mecanismo COVAX para distribución de vacunas contra el COVID-19, de alcance mundial y en el cual la UE y sus países miembros invirtieron 2.200 millones de euros del Equipo Europa (la Comisión, los Estados miembros y el Banco Europeo de Inversiones), la región de América Latina y el Caribe recibió 40.019.370 dosis de vacunas hasta el 13 de septiembre de 2021.

Como se desprende de estas escuetas pinceladas, la pandemia de COVID-19 fue y está siendo combatida en nuestra región principalmente con medios y esfuerzos particulares de los Estados y, en menor medida, a través de instrumentos de cooperación de países extrarregionales acordados bilateralmente con los países receptores.

Las condiciones estructurales y coyunturales descritas impidieron a los países latinoamericanos y caribeños delinear una estrategia o un plan regional elaborado de manera conjunta, perdiéndose así, una vez más, una magnífica oportunidad para la superación de las diferencias ideológicas y la puesta en marcha de mecanismos solidarios y de cooperación entre países vecinos.

Tampoco se utilizaron los mecanismos ya vigentes en el ámbito de las organizaciones regionales de concertación política o de integración económica. Como se ha visto, el recurso a los organismos regionales, incluidos la Organización de Estados Americanos (OEA) o el MERCOSUR, fue prácticamente inexistente. La OEA se ha visto debilitada por la creciente polarización ideológica entre sus miembros, divididos en torno a la cuestión de Venezuela y las denuncias de prácticas antidemocráticas y violaciones a los derechos humanos en ese país y en Nicaragua.

Algo semejante ha pasado con el MERCOSUR, el cual, a treinta años de su creación, atraviesa uno de sus momentos más difíciles. Las desinteligencias entre los Estados Parte alrededor de la política comercial externa y las marcadas diferencias en la orientación política de sus líderes han permeado de manera negativa el resto de los ámbitos de cooperación económica y concertación política. Es urgente recuperar el sentido de integración política y económica que dio origen al mecanismo y restablecer el normal desarrollo de la cooperación entre sus miembros, con miras a la profundización de sus relaciones y el crecimiento conjunto, así como su reinserción en el escenario internacional.

Las graves y generalizadas consecuencias socio-económicas de la pandemia y la necesidad de superar su impacto en la salud, la política, el trabajo y la educación, deberían ser un aliciente para los países de la región a reencauzar entre ellos, de manera firme y en el marco de políticas de Estado que obedezcan a sus intereses permanentes -independientemente de los gobiernos que los administren- relaciones productivas y de cooperación, no sólo a nivel bilateral sino también fortaleciendo los mecanismos de integración regional existentes. Debería ser asimismo un incentivo para moldear políticas nacionales orientadas a eliminar las desigualdades socioeconómicas, reforzar la educación, fortalecer las instituciones democráticas y mejorar las infraestructuras necesarias para un crecimiento sustentable y equitativo.

En síntesis, el objetivo a perseguir para todos los países de América Latina y el Caribe el día después de la pandemia, debería ser el trabajo en conjunto con miras a diseñar una “estrategia regional” que nos permita devenir una “región estratégica”.